

Piñeiro, Diego E.. Capítulo I. Primer Parte. En publicación: En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina. Diego E. Piñeiro. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Colección Becas CLACSO-ASDI. 2004. ISBN: 987-1183-08-9.

## CAPÍTULO I

### PRIMERA PARTE

# EL DESARROLLO AGRARIO LATINOAMERICANO Y LAS FORMAS DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Acceso al texto completo:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/identidad/Cap1parte1.pdf>

Fuente de la información: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe - CLACSO - <http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

EN LA PRIMERA PARTE de este capítulo se realizará una revisión de las distintas etapas por las que pasó el desarrollo agrario latinoamericano y se discutirán las distintas formas que fue adquiriendo la acción colectiva de los grupos subordinados del campo<sup>1</sup>. La primera etapa es el período que se conoce como la modernización conservadora y toma desde la última mitad del siglo XIX hasta 1930, reconociendo los antecedentes históricos que en la época colonial dieron lugar a la matriz agraria predominante. La acción colectiva en este período ha sido conceptualizada por algunos autores como de carácter pre-político. La segunda etapa abarca las décadas del '40 al '60 y se conoce en América Latina como el período de sustitución de importaciones o de "crecimiento hacia adentro". La acción colectiva rural en este período ya adquiere un marcado propósito político. La última etapa es la que abarca las tres décadas del siglo XX. La década del setenta signada por la ruptura del orden institucional y por el disciplinamiento de la sociedad impuesto por la fuerza es la bisagra que permite articular

---

<sup>1</sup> El autor quisiera añadir que el recorrido histórico que se realizará provendrá de una mirada que intenta ser latinoamericana, pero dados el tema y las limitaciones propias, posiblemente tenga un énfasis mayor en el Cono Sur del continente.

con un nuevo orden económico social y político que cubre las últimas dos décadas. Los procesos de acción colectiva que se estudian en este libro transcurren en este período, y su accionar será desplegado en los cinco capítulos siguientes.

## PRIMERA ETAPA: HASTA 1930

Cuando españoles y lusitanos conquistaron las nuevas tierras americanas, se encontraron con un vasto territorio poblado por civilizaciones indígenas. Si bien el principal interés estuvo colocado en la explotación de los metales preciosos, de acuerdo con las ideas mercantilistas de la época, la explotación de las tierras no tardó en constituirse en la segunda actividad en importancia. El objetivo inicial de la explotación de la tierra fue proveer alimentos a la creciente población de origen europeo y también a los indígenas que eran obligados a trabajar en las minas. También cobró importancia la producción de animales de tiro, con el fin de trasladar la producción minera hasta los puertos de salida hacia Europa.

El principal problema con que se encontraron los conquistadores europeos fue la escasez de mano de obra para realizar los durísimos trabajos en las minas y para cultivar la tierra. La población indígena, allí donde la había, se resistió de muchas maneras a la sujeción laboral y fue, además, rápidamente diezmada por los agotadores trabajos y por las enfermedades traídas por los conquistadores. Las formas de organización del trabajo de la tierra reflejaron esta escasez de mano de obra servil.

El sistema de producción más importante por su extensión y perdurabilidad fue la *hacienda*. Este sistema de organización de las relaciones sociales y de dominación política consistía en la propiedad extensiva de la tierra por europeos y criollos terratenientes, y la sujeción de la fuerza de trabajo indígena y campesina por sus vínculos con la misma. En primer lugar hubo un proceso de apropiación de las tierras de las comunidades indígenas por los terratenientes, quienes luego permitieron que los indígenas despojados se asentaran en las tierras de la hacienda pero a cambio de aportar trabajo en las tierras hacendales. La hacienda producía para los mercados internos. Este sistema fue predominante en América Latina y de él se derivó el complejo latifundio-minifundio característico del siglo XIX, pero que persistió en muchos países hasta mediados del siglo XX.

El sistema hacendal dio lugar a una estructura social propia, constituida por el hacendado en el tope de la escala, los mestizos con tierras propias, los mestizos con tareas de control en las haciendas, y los indígenas semiesclavos en tierras hacendales. Esta estructura social dio lugar a profundas diferencias de clase, a la escasa circulación del dinero ya que el pago era en productos, a un fuerte poder político de los hacendados, y a relaciones de paternalismo, compadrazgo y peonaje que tiñeron la vida social y política del continente (Chonchol, 1994).

En diversas partes de la América tropical se desarrolla el sistema de *plantación*. Este tendrá un gran desarrollo en Brasil y en algunas otras partes del continente como Venezuela, Colombia, la costa del Perú y partes de Centro América, principalmente para el cultivo de la caña de azúcar, del algodón, y más tarde del banano y del café. Este sistema será también aplicado en el sur de Norteamérica en las colonias inglesas, especialmente para el cultivo del algodón. La plantación como sistema consiste en una gran propiedad rural, en la cual con aplicación de fuertes sumas de capital y con trabajo esclavo (generalmente esclavos de origen africano), en una región tropical, con propietarios de origen europeo, se produce un cultivo cuyo producto es destinado principalmente a la exportación.

Este sistema de producción dio lugar a sociedades con fuertes diferencias sociales, sumamente conflictivas, en cuyo pináculo estaban los propietarios o concesionarios de las tierras, generalmente europeos, y en la base la población esclava de origen africano, mientras en el medio apenas medraban débiles estratos de pequeños propietarios, trabajadores calificados de la plantación y artesanos. Los recursos naturales eran deteriorados por el monocultivo que se trasladaba hacia nuevas tierras fértiles cuando se habían agotado las primeras. La seguridad alimentaria de la población era un problema serio debido a que las tierras eran empleadas en el cultivo de exportación, habiendo poco interés por parte de los propietarios en emplearlas en la producción de alimentos para el mercado interno, prefiriendo más bien importar alimentos, creando así una aguda dependencia alimentaria. Finalmente, la producción para la exportación a mercados generalmente europeos creaba una fuerte dependencia del sistema de plantación de las fluctuaciones de aquellas economías y de los vaivenes de los precios en el mercado internacional (Chonchol, 1994).

En las pampas argentinas, en las planicies onduladas del Uruguay y en el sur del Brasil, no predominó ninguno de estos dos sistemas. Con una población indígena escasa, nómada y rápidamente diezma-

da, las vastas planicies fueron pobladas tardíamente, en el siglo XVIII, con población española a la que se le repartieron tierras en “chacras” y en “estancias”. Las primeras, en el entorno de los pueblos, pequeñas parcelas para producir los alimentos que precisaban sus habitantes. Las segundas, vastas extensiones en las que tierras y animales vacunos en estado semi-salvaje eran un solo patrimonio, y que producían el tasajo para exportar a las plantaciones del norte del continente y del sur de Estados Unidos y cueros vacunos para Europa. La estancia ganadera ocupó escasísima mano de obra y por ello dio lugar a un sistema de producción extensivo y a una geografía signada por los grandes espacios y la baja densidad de población, a la que se denominará sistema de estancia.

En el último tercio del siglo XIX se produce una reorganización de las formas de producción agrarias en América Latina que se conoce como la etapa de la modernización conservadora (Chonchol, 1994). El motor de este proceso estuvo constituido por el desarrollo industrial europeo, que generó una demanda creciente de materias primas para abastecer a las nacientes industrias (algodón y lanas para la industria textil, minerales para la industria metalúrgica) y de alimentos para abastecer a la población trabajadora. Las potencias industriales, con Inglaterra a la cabeza, inician una etapa de conquista de nuevos territorios y de nuevos mercados para sus productos. En América Latina, luego de algunos intentos frustrados de conquistar los territorios de la corona española (como las invasiones inglesas al Río de la Plata), se opta por la alianza con las oligarquías locales, propietarias de las tierras, desarrollando en cambio el comercio, los medios de transporte y el sistema bancario, lo cual a la larga también les permitirá dominar la producción agrícola.

La costa atlántica del continente será el foco de atención privilegiada. Una de las regiones que menos se había desarrollado hasta el momento, la región del Plata, con sus fértiles llanuras, se transformará en la región de más rápido crecimiento en el período, multiplicando por diez el crecimiento de sus productos. Las inversiones inglesas se dirigen a la construcción de ferrocarriles, puertos, medios de comunicación, desarrollo de la energía eléctrica, inversiones bancarias, etc., con el fin de incentivar y permitir el manejo de las crecientes cosechas de cereales y de la producción de carne y lana. La oligarquía local, propietaria de extensas fracciones de tierra, no contaba sin embargo con los brazos necesarios para hacer producir sus tierras y para levantar las cosechas. Ello se resolvió con la masiva inmigración de pobla-

ción europea. La costa atlántica del continente recibió entre 1880 y 1914 alrededor de 12 millones de inmigrantes (Chonchol, 1994).

Si bien estos inmigrantes fueron atraídos por la posibilidad de conseguir tierras, en realidad muy pocos de ellos lo lograron, debido a que las oligarquías locales ya se habían apoderado de ellas en la primera mitad del siglo. Sin embargo, desarrollaron diversos sistemas de aparcerías y medierías en las que el propietario ponía las tierras, el inmigrante sus brazos, y el capital era proporcionado en montos variables por uno u otro variando con ello la proporción en que se repartían los beneficios de la producción (Scobie, 1968). La gran mayoría de los inmigrantes terminaron siendo asalariados transitorios que se ocupaban de las más rudas tareas agrícolas, como la cosecha de los cereales, para luego volver a emigrar hacia las ciudades o regresar a Europa. Fue con estos sistemas que la Argentina logra hacia las primeras décadas del siglo XX cultivar 14 millones de hectáreas con cereales.

En Brasil la gran transformación ocurre con el cultivo del café. Esta planta había sido introducida mucho antes, pero recién durante el siglo XIX se transforma en un importante cultivo de exportación, impulsada por la demanda de las crecientes capas adineradas de la población europea. Los cafetales se expandieron inicialmente en el Estado de Río de Janeiro para luego extenderse a los estados de San Pablo, Minas Gerais y Espírito Santo. Hacia mediados del siglo XIX ya las exportaciones de café superan a las de azúcar. En su explotación se emplea tanto a esclavos de origen africano como a trabajadores libres, y hacia el fin de siglo crecientemente a inmigrantes europeos.

En la costa del Pacífico la modernización conservadora ocurre con las plantaciones peruanas de caña de azúcar y de algodón. Como las comunidades campesinas indígenas de la sierra impedían la migración de sus miembros para trabajar en las plantaciones de la costa, se trajo a trabajadores de origen asiático en un sistema de semiesclavitud por deudas adquiridas durante el viaje.

En el Caribe, tanto en los países de América central como en Venezuela la forma de inserción de la agricultura en el mercado internacional pasó por los cafetales y por la plantación bananera. Es particularmente para el desarrollo de este último cultivo que los gobiernos centroamericanos conceden generosas porciones de tierras, a cambio de la construcción de ferrocarriles y puertos, a compañías extranjeras principalmente norteamericanas. Para trabajar en ellas se empleaba

población de origen africano traída de Jamaica, y también trabajadores locales que emigraban de las zonas centrales hacia la costa en busca de trabajo. La historia de feroz explotación de la fuerza de trabajo de las compañías cafetaleras y bananeras y de su interferencia en el poder del Estado es suficientemente conocida y ha sido reflejada por la novelística de la época (Chonchol, 1994).

En resumen, los casos mencionados, con los cuales no se pretende ser exhaustivo, son ilustrativos de la reinserción que sufre el agro latinoamericano en la economía mundial a partir del desarrollo industrial europeo. Se consolida el papel de suministrador de materia prima agrícola y de alimentos baratos para la población europea, sin que para ello se altere el sistema latifundiaro sobre el que descansaba el sistema de dominación política de la oligarquía local. La ingente demanda de fuerza de trabajo que representó la nueva inserción en los mercados mundiales de la agricultura latinoamericana constituyó un importante obstáculo para las clases propietarias. Ante la negativa de la población indígena a incorporarse a un régimen de cruda explotación laboral refugiándose en sus comunidades, o ante el déficit de trabajadores en ciertos espacios territoriales caracterizados por el vacío poblacional, y ante la imposibilidad histórica de continuar con el régimen esclavista, no se vaciló en recurrir a soluciones drásticas. En muchos casos los latifundistas se expandieron sobre las tierras de las comunidades campesinas, apropiándose de tierras valorizadas por los nuevos cultivos y expulsando población campesina que ahora sólo puede ofrecerse como mano de obra. En otros casos se recurrió a la importación de trabajadores de las islas caribeñas, o la importación de trabajadores chinos, japoneses o hindúes en carácter de semiesclavitud por deudas. Pero uno de los mayores contingentes de trabajadores fue importado de Europa mediante la promesa de la concesión de tierras para trabajar, que pocas veces se cumplió. La mayoría de los trabajadores europeos fueron asalariados temporales, otros lograron insertarse como medieros o aparceros en el desarrollo de los nuevos productos de exportación, mientras que unos pocos accedieron finalmente a la tierra mediante planes de colonización de tierras incultas.

## LA ACCIÓN COLECTIVA

Terminadas las guerras de la independencia en la primera mitad del siglo XIX, la mayoría de los países de América Latina se sumergen en guerras intestinas entre partidarios de regímenes del libre-cambio y

partidarios de regímenes económicos proteccionistas. Unitarios y federales en Argentina, colorados y blancos en Uruguay, liberales y conservadores en Paraguay, etcétera. Los primeros sostuvieron procesos de modernización vinculando el destino de los nuevos países al papel de proveedores de materias primas para los países europeos que estaban en pleno proceso de industrialización. Los segundos sostenían la necesidad de proteger y desarrollar una incipiente manufactura nacional. La guerra de la Triple Alianza, en la cual los ejércitos de Argentina, Uruguay y Brasil, con la ayuda y la interferencia de la corona británica, derrotaron y destruyeron el incipiente proceso de desarrollo independiente del Paraguay, es tal vez uno de los mejores ejemplos de la lucha entre estas tendencias ideológicas y políticas. El revisionismo histórico ha sugerido que las guerras civiles de mediados del siglo no fueron solamente luchas entre facciones de la oligarquía, sino que detrás de los caudillos que defendían el proteccionismo, en las montoneras gauchas, se alineaban los sectores populares rurales.

Pero esa lucha, compendiada en la celebre dicotomía sarmientina entre civilización y barbarie, fue ganada por aquellos que propugnaban una modernización dependiente vinculada al desarrollo de la agricultura como proveedora de materias primas, mientras estimulaban las inversiones europeas en infraestructuras y servicios. Hacia fines del siglo XIX, y durante las tres primeras décadas del siglo siguiente, América Latina conoce un importante desarrollo vinculado a este modelo político y económico. Los procesos de acción colectiva sin embargo prosiguieron, ya no como guerras internas, sino como manifestaciones parciales de diversos grupos y sectores subordinados que se rebelaban contra las condiciones de dominación impuestas en especial por las clases terratenientes. La revolución mexicana de la segunda década del siglo XX parece haber sido la única excepción. Pero en muchos países y regiones levantamientos campesinos y revueltas populares en el campo jalaron el proceso de modernización conservadora descrito más arriba. No es el objeto de este libro ni de este capítulo hacer una revisión o una enumeración de estos procesos de acción colectiva. Pero sí contribuye al objetivo del libro detenerse en el debate acerca de si estos movimientos fueron formas pre-políticas o si por el contrario fueron formas políticas de la acción colectiva.

En un conocido artículo sobre la acción colectiva, Aníbal Quijano propone llamar pre-políticos a los movimientos campesinos latinoamericanos anteriores a la década del treinta, porque no se proponían modificar las relaciones de poder y la estructura social vigente

en sus sociedades, sino más bien modificar aspectos parciales de la misma<sup>2</sup>. A su vez categoriza a estos movimientos en movimientos mesiánicos, bandolerismo social, movimientos racistas y movimientos agraristas tradicionales o incipientes. Los primeros son movimientos que pretenden modificar las relaciones entre el hombre y lo sagrado y tienen un marcado carácter místico y religioso. En los segundos, la acción de los campesinos tiene una clara finalidad punitiva dirigida hacia aquellos grupos sociales o personas que oprimen a los campesinos: los terratenientes, los comerciantes, las autoridades locales. Los movimientos racistas son aquellos en los que la reivindicación está dirigida contra un estamento dominante que los oprime por razones derivadas de las diferencias étnicas, pero sin que hubiese reivindicaciones dirigidas a la modificación de la estructura social. Los movimientos agraristas tradicionales persiguen finalidades de reforma social circunscriptos a aspectos limitados de la vida social o de las relaciones de poder. Quijano les reconoce a estas formas pre-políticas la capacidad de evolucionar hacia las formas políticas de lucha campesina que serán propias de la etapa siguiente (Quijano, 1967).

En un artículo posterior incluido en un vasto estudio dirigido por González Casanova (1985) sobre la historia política de los campesinos latinoamericanos, José de Souza Martins, sin pretender invalidar la distinción entre movimientos pre-políticos y movimientos políticos de los campesinos, nos previene acerca de una tendencia de los intelectuales y políticos de izquierda a preconcebir a la acción colectiva campesina como movimientos pre-políticos. En la base de esta forma de ver los movimientos se halla una cierta incomodidad del marxismo con los campesinos. Por un lado, por la dificultad de ubicarlos en un esquema de clases. Por otro lado, por la dificultad de atribuirles la posibilidad de constituir una clase en sí, capaz de una acción dirigida a modificar las relaciones sociales de producción y con ellas las relaciones de poder (Martins, 1985).

Martins analiza dos movimientos mesiánicos y dos casos de bandolerismo social en el Brasil para sostener su hipótesis de que aún las formas de acción colectiva pueden ser entendidas como formas de cuestionamiento a las relaciones de poder. El primer caso estudiado es el de la rebelión de Canudos en el Estado de Bahía. Un antiguo beato

---

<sup>2</sup> Quien a su vez se basa, en parte, en las categorías creadas por Eric J. Hobsbawm en su libro *Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movements in the 19th and 20th Centuries*, The Norton Library, New York, 1959.



llamado Antonio Consejero funda una población denominada Belo Monte que llegó a tener 30 mil habitantes. Este movimiento fue duramente combatido con el pretexto de que eran monárquicos, y finalmente exterminado por el ejército entre 1896 y 1897. El segundo movimiento ocurre en el sur en el límite disputado entre los estados de Paraná y de Santa Catarina. En esas tierras se instala el monje José María acompañado por sus seguidores, campesinos desplazados y campesinos sin tierra, y esto es interpretado por los paranaenses como una invasión de campesinos del Estado vecino. Atacados por las milicias del Estado de Paraná, el monje José María es muerto pero sus adeptos consiguen derrotar a las tropas y apoderarse de las armas. Los campesinos se retiran hacia sus refugios y durante cuatro años logran sobrellevar una guerra en la que más de veinte mil de ellos se verán involucrados. En sus tierras llevan una vida comunitaria e igualitaria y alientan la creencia del regreso de aquellos que son muertos en el combate. De esta manera la guerra se hace inevitable y prolongada.

Martins hace ver que en realidad ambos movimientos reúnen a campesinos que han sido desplazados por “coroneles” y latifundistas que se apropian de sus tierras. Al crear sociedades de iguales con reglas diferentes a las instauradas por aquellos que los oprimían, los campesinos no sólo se rebelaban en busca de tierras, sino que también cuestionaban seriamente el orden instituido. Si se declaraban monárquicos era porque nada bueno les venía de la naciente República. En este sentido, dice de Souza, los movimientos mesiánicos también eran políticos.

Una reflexión similar se desprende de su análisis del bandolerismo social. Toma dos ejemplos: el de Antonio Silvino y el de Lampião, que desarrollan su accionar en el *sertão* en las primeras tres décadas del siglo XX. Ambos actuaban por vengar afrentas y violencias recibidas por su familia. Silvino tenía como norma no atacar a campesinos ni trabajadores, y distribuía parte de lo que robaba en haciendas y comercios entre los pobres. Lampião no distinguía claramente entre ricos y pobres, tuvo la protección de hacendados, y con frecuencia se alquilaba a unos “coroneles” para atacar a otros. Ambos, Silvino y Lampião, son arquetipos del *cangaçeiro*: un campesino expulsado de sus tierras, agraviado por hacendados o comerciantes, y contra quienes dirigía su venganza. Ambos casos muestran, según de Souza, que los *cangaçeiros* constituían un cuestionamiento al poder de los coroneles, y en este sentido su accionar también podría ser considerado político.

La historia de dominación étnica de nuestro continente ha dado innumerables ejemplos de luchas en las que predominaban las cuestiones de raza. Uno de los casos más conocidos es la creación de pueblos libres por parte de esclavos de origen africano en las tierras del norte del Brasil. Como ya se mencionó más arriba, el sistema de producción de la plantación azucarera fue el principal recurso económico durante el periodo colonial lusitano. Se estima que en el siglo XVIII había 2.500 ingenios azucareros en las costas atlánticas del Brasil. Para realizar el trabajo en dichos ingenios se importaron tres millones y medio de esclavos durante el periodo colonial. Dadas las terribles condiciones de trabajo de estos esclavos, cuando podían huían hacia la selva, hacia el interior del país escasamente habitado, y allí constituían poblados independientes –conocidos como *quilombos*– regidos por sus propias reglas, dedicados a la agricultura de subsistencia. Estos poblados eran frecuentemente atacados por el ejército y por milicias privadas de los ingenios, que no sólo querían recuperar los hombres de su propiedad, sino también castigar el mal ejemplo que constituían para el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. El más conocido fue el *quilombo* de Palmares, que sobrevivió durante un siglo y llegó a tener varios miles de habitantes.

Uno de los casos estudiados en profundidad en este libro, el del movimiento de los mapuches en Chile, tiene durante la primera mitad del siglo XX las características de un movimiento “racista” como sugiere la categorización de Quijano. Los mapuches del sur de Chile tuvieron durante la primera mitad del siglo XX una política contradictoria de integración y de resistencia que en realidad es la expresión de las distintas tendencias que convivían al interior de la etnia. En este sentido tanto integración como resistencia resumen la tragedia de la dominación étnica de este pueblo por los chilenos. Pero, como se verá luego, tanto desde una posición como desde la otra los mapuches hicieron considerables esfuerzos por participar de la vida política de la sociedad chilena.

En resumen, el proceso de modernización conservadora que ocurre en la agricultura latinoamericana entre las últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX dio lugar a diversas formas de expresión de los grupos subalternos para resistir la opresión y la dominación. Si bien Aníbal Quijano los categoriza como movimientos pre-políticos, tal vez una mirada más abierta a las motivaciones últimas de los movimientos descubra su potencial político.

En la etapa siguiente las motivaciones de los movimientos serán más claramente políticas.

## EL PERÍODO DE DESARROLLO HACIA ADENTRO

La crisis iniciada en 1930 no fue solamente económica y financiera. Los procesos de reorganización de las zonas de influencia de las grandes potencias terminan de concretarse con los acuerdos de Yalta, con los que se da fin a la Segunda Guerra Mundial y se instaura un nuevo orden político. La guerra fría divide el mundo y tensa las relaciones entre los dos grandes bloques. Pero también el esfuerzo bélico que tuvieron que hacer los países capitalistas de Occidente facilitó la aparición en América Latina de gobiernos que ensayaron vías económicas alternativas. Coincidiendo con las teorías económicas de la CEPAL acerca del intercambio comercial desigual, gobiernos generalmente de tendencias populistas inician experiencias de industrialización que buscan reemplazar las importaciones de productos manufacturados. Este proceso a su vez hace crecer y cohesiona a una burguesía industrial autóctona, que cobrará una considerable importancia económica y política.

Es necesario recordar que los medios técnicos de producción en el agro que habían experimentado importantes cambios en los países desarrollados se incorporaron en forma mucho más lenta en América Latina. La tractorización y la mecanización se expandieron recién en la década del cincuenta. La industria química ligada a la agricultura también había desembarcado en el continente, y los abonos inorgánicos y los diversos pesticidas se encontraban en el mercado. La industria semillera estaba dando un paso gigantesco con la incorporación de los híbridos. Todas estas tecnologías estaban disponibles pero el latifundio se interponía con obstinación (Gómez y Pérez, 1979).

El complejo latifundio-minifundio, forma derivada del viejo sistema hacendal, significaba un impedimento para el desarrollo del capitalismo industrial y agrario. Éste capta renta que no se reinvierte, y al impedir la reinversión no es un demandante de productos industrializados; retiene mano de obra campesina a lo interno de la hacienda, con lo cual deprime la circulación del dinero y limita la creación de un mercado de trabajo rural; impide que los campesinos y trabajadores del campo sean consumidores de bienes industrializados, y finalmente impide la migración campo-ciudad que era necesaria para la creación de un amplio mercado de trabajo urbano.

En consecuencia, en varios países de América Latina emergen alianzas dirigidas a fracturar el poder terrateniente. A veces es la burguesía industrial y urbana la que se alía con los campesinos. En otras ocasiones, especialmente cuando la burguesía local era débil, ese papel lo cumplían las Fuerzas Armadas y entonces fueron las alianzas militares-campesinos las que condujeron un proceso revolucionario (o no) de reestructura de la propiedad de la tierra (por ejemplo en Bolivia en 1952, y posteriormente la revolución liderada por Velasco Alvarado en el Perú.). En Chile, donde el poder terrateniente era muy fuerte, el proceso fue mucho más lento, y si bien se inició con la tímida reforma de la Democracia Cristiana, fue luego profundizado por el gobierno socialista de Salvador Allende. Lo cierto es que en las décadas del cuarenta al sesenta en casi todos los países del continente latinoamericano se crearon fuertes organizaciones campesinas que tuvieron un papel relevante en las revueltas políticas de esos turbulentos decenios y en los procesos de reforma agraria consiguientes.

No fue ajeno a todo ello el hecho de que a principios de la década del sesenta Estados Unidos pone en marcha la Alianza para el Progreso, plan destinado a restar fuerzas a las reformas agrarias de corte izquierdista (como la que recientemente había ocurrido en Cuba) anticipándose y estimulando la realización de reformas agrarias que redistribuían la tierra, eliminando el poder del latifundio pero manteniendo firmes y vigentes los principios de la propiedad privada y del desarrollo agrario capitalista.

En cuatro de los cinco países de los cuales se ocupa este libro, el proceso de transformación de la propiedad territorial fue distinto. En Uruguay y en Argentina (y cuando se habla de Argentina se está haciendo referencia a la zona pampeana), los grandes propietarios de tierras, los “estancieros”, se modernizaron ellos mismos transformándose en activos empresarios agropecuarios, insertándose en los mercados de tierras, de productos, de mano de obra y de capital. La transformación por lo tanto ocurrió sin necesidad de cambios estructurales y no hubo reforma agraria. A lo sumo, la creación de un tímido proceso de colonización dirigido por entes estatales. En Paraguay, en cambio, la revolución burguesa nunca se llevó cabo y la descompresión de la conflictiva situación del agro se produjo por la apertura de amplias áreas de colonización haciendo avanzar la frontera agrícola. Brasil posiblemente sea una situación que haya combinado las dos formas: modernización de una parte del empresariado agrícola (y por otra parte permanencia del latifundio), y apertura de nuevas tierras para la

colonización campesina. Lo concreto es que en ninguno de los cuatro países se llevó a cabo una reforma agraria entre 1940 y 1960 a pesar de las presiones internas y externas para que se concretasen.

Hacia la década del sesenta este modelo ya mostraba signos de agotamiento. El proceso de industrialización se encontraba estancado, la producción agraria volcada a los mercados internos había encontrado sus límites, los procesos inflacionarios corroían los ingresos de los asalariados y con ello la base de sustentación del modelo. Hacia la década del setenta comienza un proceso de liberalización económica, apertura de fronteras, ajuste económico y desregulación estatal que modificará profundamente las economías y las sociedades de los países latinoamericanos.

### LA ACCIÓN COLECTIVA

Para Quijano (1967), luego de la crisis del '30 las movilizaciones campesinas en América Latina cobran un cariz distinto a las de la etapa previa. Según su tipología, los movimientos campesinos ya serán movimientos políticos, distinguiendo entre el agrarismo reformista y el agrarismo revolucionario. En el primer tipo distingue dos variantes: en la primera variante del agrarismo reformista encuadra aquellos procesos dirigidos a modificar aspectos negativos en las relaciones de trabajo, en los que el instrumento de lucha será la huelga. Esta modalidad será más importante en aquellos lugares en que las haciendas han evolucionado a formas asalariadas de trabajo o donde el sistema agrario predominante es el de plantación. La segunda variante surge cuando los movimientos campesinos se dirigen a modificar predominantemente la relación con la tierra pero sin proponerse necesariamente la modificación de las relaciones sociales de la sociedad agraria. Finalmente Quijano elabora la categoría de agrarismo revolucionario presentándola como una situación aún incipiente y que apenas se distingue del agrarismo reformista. La categoría se define como aquellos movimientos campesinos que luchan no sólo por la transformación de las relaciones de propiedad de la tierra sino por la modificación de toda la estructura de poder, la redistribución de la autoridad y del prestigio social en la sub-sociedad campesina. El ejemplo más notable de este agrarismo revolucionario es el movimiento campesino y miliciano que se movilizó con la revolución boliviana en 1952. Corresponde detenerse brevemente en este proceso histórico que fue

durante aquellos años el espejo en que se miraron los movimientos campesinos del continente.

La revolución boliviana de 1952 es un buen ejemplo de las alianzas que se establecieron entre campesinos y militares para destruir el régimen oligárquico preexistente<sup>3</sup>. En la primera mitad del siglo XX Bolivia era un país escindido en dos mundos distintos. Con un 62% de población indígena y 25% de mestizos era gobernado por una oligarquía de origen blanco. Esta despreciaba profundamente al pueblo indígena, al que había sojuzgado por varios siglos. La economía del país reposaba en la industria minera y en una agricultura aún basada en el sistema hacendal. Durante la segunda mitad del siglo XIX la oligarquía había utilizado su control del Estado para extender sus propiedades despojando de sus tierras a las comunidades indígenas. Los indígenas aún estaban obligados a trabajar las tierras hacendales y a pagar diversos tributos al Estado. En realidad, buena parte de la economía fiscal se basaba en la tributación indígena.

La derrota que sufren el gobierno oligárquico y el ejército boliviano en la guerra por el petróleo del Chaco desacredita a la oligarquía e inicia el camino hacia su desaparición. Dentro del ejército boliviano surge una camada de jóvenes oficiales imbuidos de una ideología nacionalista, deseosos de reivindicarse luego de la derrota sufrida. La democracia de las trincheras y el activo papel que los indios jugaron en la guerra facilitan la revalorización de lo indígena. A principios de la década del cuarenta surge un nuevo partido anti-oligárquico conformado por la confluencia de asociaciones de ex-combatientes y el emergente sindicalismo obrero y campesino. Los líderes de este partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, son jóvenes políticos provenientes de los sectores medios de la sociedad no indígena. Los gobiernos de postguerra con fuerte influencia militar adoptan medidas como la sindicalización obligatoria y la creación de un Ministerio de Trabajo que aceleran el proceso de organización sindical obrera y campesina.

A principios de la década del cuarenta llega al poder el General Villarroel en alianza con el cada vez más fuerte MNR. Las medidas de este gobierno, y sobre todo su apoyo y reconocimiento a las organizaciones indígenas campesinas, acrecientan los temores de los sectores

---

<sup>3</sup> El análisis del movimiento campesino boliviano está basado en Silvia Rivera Cusicanqui. "Apuntes para una historia de las Luchas Campesinas en Bolivia" (1900-1978). En Pablo González Casanova (Coord.), *Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos*, Editorial Siglo XXI, 1985.

urbanos blancos, que terminan con una revuelta que asesina al Presidente.

Se inician así seis años de una cuasi guerra civil (1946-1952) en que se alternan tomas de haciendas y de poblados por los campesinos con represiones sangrientas del ejército. Los dirigentes campesinos, obreros y del MNR, terminan confraternizando en las cárceles, y en ellas se construye un proceso de acercamiento entre líderes sindicales y dirigentes del MNR.

En 1952 estalla una revolución, con apoyo de algunas facciones del ejército y con amplio apoyo popular y de las organizaciones sindicales obreras y campesinas, que lleva al MNR y a Víctor Paz Estenssoro al poder. A partir de allí se lleva a cabo una profunda reforma que implica la nacionalización y el traspaso al Estado de las principales empresas mineras, ferrocarriles, servicios públicos, etc., instaurando la participación obrera en la dirección de las mismas. Se propende a la ampliación del mercado interno y a la sustitución de las importaciones de alimentos. Paralelamente se lleva a cabo una reforma agraria que buscó destruir el sistema hacendal y el poder terrateniente. Con frecuencia la distribución de las tierras señoriales fue llevada a cabo por los propios campesinos y luego legitimada por el Estado. Esto, a veces, dio lugar a conflictos violentos entre los propios campesinos –antiguos comuneros, colonos de las haciendas y trabajadores de las haciendas–, ya que todos creían tener derechos sobre las tierras. El resultado fue el establecimiento de un sistema agrario con una fuerte predominancia de una agricultura campesina asentada en predios de escasa superficie (Chonchol, 1994).

Rivera arguye que para el análisis del movimiento campesino boliviano es preciso distinguir dos fases. En la primera “cristaliza un movimiento reivindicativo amplio, combativo y centrado en torno a la lucha por la tierra” (Rivera, 1985:193). Esta fase terminó con la subordinación del movimiento campesino al Estado, ya que se “culmina con el establecimiento de estructuras de mediación entre el movimiento campesino y el Estado, cuya manifestación externa es la formación de un aparato sindical paraestatal crecientemente controlado por el MNR” (Rivera, 1985:194). Este poderoso movimiento sindical llegó a tener medio millón de afiliados y cerca de 20 mil sindicatos de base.

En la segunda fase, finalizado el proceso de reforma agraria, resuelto el problema de la tierra y consolidada la estructura sindical que dependía fuertemente del Estado, empezaron a resquebrajarse las

bases de apoyo del MNR, comenzando por el distanciamiento del poderoso sindicalismo obrero. En esa circunstancia el sindicalismo campesino se vio en la necesidad de optar entre apoyar a este último o proseguir bajo la tutela del Estado que le garantizaba la continuidad de sus conquistas, enfrentando al sindicalismo obrero.

La opción por continuar la alianza con el Estado, que a su vez se distanciaba cada vez más del movimiento popular, reforzó el distanciamiento de las cúpulas dirigentes campesinas de los sindicatos de base y acentuó las tendencias al prebendalismo y la corrupción de sus dirigentes. La gradual y creciente subordinación del sindicalismo campesino al Estado se consolidó con el Pacto Militar-Campesino y el desarme de las milicias rurales, acordado entre los dirigentes sindicales y el nuevo Presidente y líder militar, el general Barrientos, en 1964.

Sin embargo la alianza entre el Estado y el movimiento campesino no duró mucho, socavada por dos frentes: la pérdida de legitimidad de un gobierno que gradualmente se fue inclinando a los dictados del neoliberalismo (especialmente a partir del mandato de Banzer) y la pérdida de legitimidad de las cúpulas sindicales. Hacia mediados de la década del setenta aparecieron organizaciones campesinas independientes de la estructura sindical que se rebelaron contra la corrupción y el servilismo político de los dirigentes sindicales campesinos, el Movimiento Katarista, que inauguró ya un proceso de organización campesina diferente.

En los cinco países que estudiamos en este libro, los procesos de acción colectiva de los estratos subordinados del campo recorren caminos distintos. Se hará una breve recorrida por los mismos sin perjuicio de volver sobre ellos cuando se traten los casos específicos en cada país. En Chile el desarrollo agrario continuaba todavía aherrojado por el sistema latifundiaro aún en la década del cincuenta. Las organizaciones campesinas e indígenas habían crecido con grandes dificultades durante la primera mitad del siglo, alternando períodos en que podían tener cierto margen de organización con otros en que sus actividades eran prohibidas y perseguidas. A principios de la década del sesenta la burguesía industrial había cobrado más influencia y exigía el quiebre del sistema latifundiaro. Una alianza de partidos de izquierda con la recientemente creada Democracia Cristiana allana el camino hacia la promulgación de una legislación que permite la organización sindical en el campo. Los sindicatos agrarios crecen rápidamente en los años siguientes, creándose Confederaciones Sindicales que responden a los principales partidos políticos. Con el triunfo de la



Democracia Cristiana en 1964, con fuerte apoyo campesino, se inicia una primera reforma agraria que tenía como fin el desarrollo capitalista agrario y la creación de una agricultura familiar que fuese el basamento del partido en el poder. La organización campesina también jugará un rol importante en el triunfo de la Unidad Popular en 1970 y constituirá un importante apoyo a la profundización de la reforma agraria que encara el gobierno socialista. Las organizaciones campesinas serán duramente reprimidas con el golpe militar en 1973, y la contrarreforma agraria militar terminará de consolidar el desarrollo agrario capitalista en el campo chileno (Bruna, 1985).

Brasil tiene una amplia historia de movimientos campesinos de distinta entidad y duración. A mediados de la década del cincuenta en Pernambuco y en Paraíba se crean las condiciones políticas que llevan a la creación de una organización de los *foreiros*, campesinos que trabajan en las tierras de los ingenios azucareros y que se denominó Ligas Camponesas. En Pernambuco, una alianza entre la burguesía industrial regional y el Partido Comunista permite ganar la Prefectura de Recife y luego la gobernación del Estado. Esto facilitó la creación de organizaciones locales de trabajadores, y así como se organizaron las ligas, también se organizan los trabajadores de los ingenios. En toda la historia sindical de Brasil está presente esta dualidad, la organización campesina y la organización de los trabajadores rurales, a veces juntas y a veces separadas. Las ligas se convierten en un importante factor de poder en la región, realizan algunas ocupaciones de tierras, y luego consiguen la expropiación del ingenio Galilea y el reparto de sus tierras. Aunque sólo eran 500 hectáreas, el impacto político de dicha expropiación fue grande y estuvo entre los motivos que condujeron al golpe de estado militar en 1964 que depuso a Goulart e ilegalizó a las Ligas Camponesas (Martins, 1985).

En Paraguay, durante la década del cincuenta el gobierno opta por orientar el desarrollo del agro hacia la producción para la exportación apoyando un modelo basado en las empresas dedicadas a la producción agrícola-ganadera extensiva. Este estímulo alienta a los ganaderos a apropiarse de las tierras comunales de las comunidades campesinas. Los primeros despojos promueven la organización campesina con el apoyo de la Iglesia Católica, creándose en 1960 la primera Liga Agraria Cristiana. El decidido involucramiento de muchos párrocos y de organizaciones sindicales de origen cristiano fue facilitado por las nuevas orientaciones de la Iglesia que surgen luego del Concilio Vaticano II. Las ligas se extienden rápidamente en la región

sur y oriental del país, creándose cuatro años más tarde dos federaciones de ligas campesinas. El eje del accionar de las ligas estará dado por la recuperación de las tierras comunales asediadas por los ganaderos, la realización de una reforma agraria, y la lucha por precios justos por los productos comerciales campesinos, principalmente el algodón. Hacia la década del setenta el movimiento liguista ha crecido también políticamente. Logra identificar con mayor claridad a sus enemigos y gestar sus alianzas, iniciando un camino de distanciamiento de la Iglesia Católica. Esto facilitará la posterior represión, aniquilamiento de las dirigencias y disolución del movimiento, en 1976, por el régimen de Stroessner.

Para sintetizar los procesos de acción colectiva en el campo argentino es preciso distinguir al menos dos situaciones diferentes. En la región pampeana de fértiles llanuras, empresas agropecuarias capitalistas y un sector de agricultores medios propietarios y arrendatarios, estos últimos se organizaron tempranamente (1912) en la Federación Agraria Argentina. El modelo de sustitución de importaciones los favoreció en cuanto productores de bienes de consumo. El gobierno peronista, si bien no enfrentó directamente a la clase terrateniente, congeló los arrendamientos y favoreció de diversas maneras a los agricultores familiares pampeanos. En las economías regionales la distribución de la tierra era más asimilable a un sistema latifundio-minifundio con sectores campesinos y agricultores familiares de origen inmigrante. En las provincias del noreste de la Argentina<sup>4</sup>, los agricultores familiares y campesinos fueron duramente castigados hacia fines de la década del sesenta, por el agotamiento del modelo económico de sustitución de importaciones y la consiguiente crisis de mercados de sus productos (algodón, tabaco, yerba mate, caña de azúcar, maíz). Contando con el decidido apoyo y sostén de los sectores progresistas de la Iglesia Católica, crean las ligas agrarias en 1971. Estas serán la punta de lanza de las movilizaciones de los sectores subordinados del campo argentino cuyos sectores medios reclaman por mejores condiciones para sus productos, mientras los sectores campesinos reclaman por la devolución de tierras apropiadas por los ganaderos o la realización de planes de redistribución de tierras públicas o de tierras mal habidas. Las ligas agrarias tienen un rápido crecimiento y una amplia distribución, llegando a abarcar ocho provincias

---

4 En otras regiones también hubo movimientos campesinos. Por ejemplo, las luchas de los campesinos cañeros en la provincia de Tucumán.

del noreste y del centro de la Argentina pero serán reprimidas y disueltas por el golpe militar de 1976 (Ferrara, 1973).

En el Uruguay, el modelo económico de sustitución de importaciones y de protección de la agricultura local favoreció el crecimiento de la agricultura familiar durante las décadas del cuarenta y del cincuenta. La organización que los representaba, la Comisión Nacional de Fomento Rural, creada en 1915, tiene firmes vínculos con el gobernante Partido Colorado. Por consiguiente, cuando hacia fines de la década del cincuenta el modelo se agota y comienzan las dificultades en los mercados de los productos de la agricultura familiar, surge un nuevo movimiento que aglutina a los agricultores familiares y estratos medios del campo: el Movimiento Ruralista. Este movimiento, organizado por un líder carismático que era periodista radial, inaugura una modalidad de movilizaciones denominada cabildos abiertos que arrastra a cientos de agricultores en un proceso que desconcierta a los partidos de todo el espectro político. Sin embargo, el poderoso sistema de partidos del Uruguay termina cooptando al principal dirigente del movimiento, que al aliarse con el Partido Nacional tendrá una decidida influencia en las elecciones que terminarán con casi cien años del Partido Colorado en el poder. Ya fuera por la circunstancia de que el nuevo gobierno no modifica la situación o porque el líder muere al poco tiempo, el Movimiento Ruralista termina disolviéndose pocos años después (Abulafia, 1979; Methol, 1959; Cosse; 1982)<sup>5</sup>.

La eclosión de movimientos campesinos en varios países de América Latina, las reformas agrarias, y en general la gran transformación que estaba ocurriendo hacia mediados del siglo XX sepultando definitivamente al sistema latifundio-minifundio, y procesos como la revolución boliviana y la revolución cubana, replantearon entre los intelectuales latinoamericanos la cuestión campesina. La izquierda marxista siempre había tenido una relación incómoda con el campesinado, como se mencionó mas arriba, por las dificultades para ubicar a este en un esquema de clases en que la contradicción principal era entre la burguesía y el proletariado (pero el proletariado industrial, la

---

5 Esto no significa desconocer que, coherentemente con un mayor desarrollo del capitalismo agrario, en Uruguay también hubo importantes procesos de acción colectiva llevados a cabo por trabajadores asalariados rurales. En su organización cumplieron un papel tanto el Partido Comunista Uruguayo como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. La organización de los asalariados rurales fue desconocida y combatida por los empresarios rurales y perseguida desde el Estado en diversas épocas. Ver Yamandú González Sierra, *Los Olvidados de la Tierra*, Editorial Nordan, 1994.

clase obrera) y donde el campesinado sólo aparecía como una rémora de modos de producción ya perimidos.

Este debate ya había tenido una importancia fundamental durante la revolución rusa: muy complejo, e intelectualmente muy rico, se lo puede simplificar en dos posiciones básicas. Los leninistas sostenían que el capitalismo estaba muy desarrollado en el campo ruso, y que si bien aún había muchos campesinos, estos estaban en un agudo proceso de diferenciación que terminaría reubicándolos en las dos clases básicas del capitalismo: mientras la mayoría habría de deslizarse hacia la proletarización, unos pocos se transformarían en agricultores capitalistas. Sus opositores más ilustrados fueron los integrantes de la Escuela de Organización y de la Producción, cuya cabeza visible era Chayanov. Estos sostenían que, dado que el capitalismo en el campo ruso no estaba desarrollado aún, el campesinado era la clase básica a partir de la cual se podía reorganizar un sistema de producción socialista tomando como eje la construcción comunitaria que eran las comunas campesinas rusas. Sostenían que el campesinado era un modo de producción en sí mismo comparable al feudalismo o al capitalismo, y que la agricultura en una nueva sociedad podía basarse en ellos.

El debate entre marxistas y la Escuela de la Organización y la Producción tenía muy claras implicancias políticas. Para Lenin, como el capitalismo ya estaba bien establecido en el campo ruso, el proceso revolucionario debía llevar adelante esta diferenciación con el fin de desarrollar las fuerzas productivas que conllevarían naturalmente a la última etapa de la colectivización de la tierra mientras se expropiaba a la burguesía agraria. Para los populistas, como el capitalismo no estaba aún plenamente desarrollado, la comuna campesina rusa debía preservarse y basarse en la misma para construir el socialismo agrario. La tarea era encontrar formas apropiadas que organizaran a los campesinos con el fin de desarrollar al sector agrícola alrededor de esta fracción de clase. Su objeto era preservar al campesinado como una clase progresista a medida que se desarrollaba la industrialización de Rusia. Para Chayanov esto se lograría a través de la integración vertical de cooperativas que, mientras preservaba la unidad doméstica campesina, tendría como objeto integrarla en el mercado nacional e internacional.

El debate en la década del sesenta se reproduce en términos bastante parecidos, atizado por los movimientos campesinos y las reformas agrarias. Eric Wolf escribe un libro que tendrá mucho

impacto entre los intelectuales dedicados a la cuestión campesina. En su *Peasant Wars of the Twentieth Century*, Wolf analiza seis revoluciones de este siglo: la revolución agrarista mexicana, la revolución china, la lucha del pueblo vietnamita, la revolución argelina, la revolución cubana y la revolución rusa, y sostiene que en la base de todos estos movimientos hubo campesinos como la fuerza revolucionaria principal. Sostenía además que no eran ni siquiera los campesinos más pobres los que se levantaban en armas, sino por el contrario aquellos estratos campesinos más acomodados que tenían recursos materiales como para sostener la revolución (Wolf, 1973).

Entre los latinoamericanos la discusión se dio entre “campesinistas” y “descampesinistas” o “proletaristas”. Estos últimos sostenían que el proceso de proletarización ya estaba muy avanzado y que la fuerza transformadora de la sociedad vendría de una alianza entre proletarios urbanos y rurales. Por otro lado, los campesinistas sostenían que el campesinado podía coexistir con unidades capitalistas agrarias, y aún más, que podía ser un sujeto del desarrollo rural. Si la investigación agrícola y el apoyo del Estado (ahora sesgado a las empresas capitalistas agrarias) se volcaran a los campesinos, estos podrían abastecer el mercado interno.

En conclusión, en las páginas precedentes se ha ensayado una apretada síntesis de los procesos de acción colectiva de los sectores subordinados del campo latinoamericano. De ninguna manera se ha pretendido ser exhaustivo, lo cual resultaría imposible por la riqueza y la variabilidad de los hechos que se están estudiando. Esta síntesis ha tenido la intención de preparar el terreno, brindando los antecedentes históricos, para una discusión de los procesos de acción colectiva que se generarán en las dos décadas finales del siglo XX en el campo latinoamericano. Ella nos permite realzar algunos aspectos que se quieren señalar ahora y que son introducidos como temas o problemas que serán retomados luego en el análisis de cada organización en los cinco países seleccionados.

1. En primer lugar señalar, en coincidencia con Quijano (1967), el carácter político de los principales procesos de acción colectiva rural reseñados para este período. Los ejes de la acción colectiva pasan por la reivindicación de la tierra –y generalmente por la reforma agraria, en consonancia con las propuestas políticas de la época– y de mejores condiciones de precios y de comercialización de los productos campesinos, señalando

con esto la inserción de los mismos en los mercados nacionales. Además, todos los movimientos estudiados se plantean (y algunos lo logran), una directa intervención en el escenario de la política nacional.

2. Mostrar la extrema variabilidad de las forma de la acción colectiva en el campo latinoamericano que se vincula a diferentes realidades históricas, diferentes estructuras agrarias y distintos procesos políticos nacionales.

3. Coincidir con que el principal criterio de construcción de la unidad de la acción colectiva en este período fue la identidad de clase. Ya sea como campesinos o como agricultores familiares, y a veces, cuando las condiciones históricas lo permitieron, con alianzas entre ambos tipos de actores sociales.

4. Por otro lado, el renacimiento del interés en los movimientos campesinos como sujetos portadores del cambio social tuvo el efecto de oscurecer otros clivajes que ya se encontraban entre los campesinos, como la cuestión indígena, la cuestión de género, el clivaje etario o la construcción de identidades locales. En la medida que los campesinos eran revalorizados, como aliados del proletariado urbano o como una clase en sí misma que era capaz de sostener un proceso revolucionario (aunque tuviese que ser conducida por individuos de fuera de la clase campesina como sostenían muchos), se intentaba minimizar otras formas de dominación. En el caso particular de la dominación étnica, los indígenas importaban en cuanto trabajadores rurales o en cuanto campesinos en su relación con la tierra. Era su posición en el proceso productivo lo que les confería la capacidad revolucionaria, y no el color de la piel o la existencia de una cultura distinta. Un marxista esclarecido como fue José Carlos Mariátegui proclamaba: “el socialismo nos ha enseñado a plantear el problema indígena en nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo abstractamente como problema étnico o moral para reconocerlo concretamente como problema social, económico y político” (Mariátegui, 1991).

5. Mostrar la importancia del contexto político en el cual se desenvuelve la acción colectiva. En general se ha insistido, para este período histórico, en procesos de debilitamiento de las oligarquías terratenientes a manos de una naciente burguesía industrial o, en su ausencia, por la acción de sectores mili-

tares que emprenden esta tarea histórica. Tampoco se debe desdeñar el papel del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que lanza la Alianza para el Progreso con el fin de apoyar y sostener a las a veces vacilantes o débiles burguesías nacionales. Hacia el fin del período de industrialización sustitutiva de importaciones los procesos de acción colectiva son llevados a cabo por sectores que se habían beneficiado con él, en busca de restituir las condiciones políticas y económicas que se agotaban. Los casos reseñados de las ligas en los tres países sureños y del Movimiento Ruralista en el Uruguay son un claro ejemplo de esta situación.

6. También parecería quedar más clara con la revisión realizada la importancia de los agentes externos o los “mediadores” en la constitución de procesos de acción colectiva llevados a cabo por campesinos o agricultores familiares. En algunos casos son los vínculos con militares, en otros casos son las relaciones con los partidos políticos, generalmente de izquierda, pero a veces también de otra ubicación en el espectro político. Uno de los casos tal vez más interesantes es el papel que ha cumplido la Iglesia Católica en la organización campesina, posiblemente para cerrarle el paso a los partidos de izquierda.

7. Los casos reseñados también apuntan a señalar, en muchos casos, la ausencia de mecanismos que fortaleciesen la democracia interna en las organizaciones campesinas. Predominaron las estructuras verticales y los liderazgos fuertes que se prestaron a la cooptación política e incluso a la corrupción económica.

8. Las movilizaciones campesinas no fueron ajenas, a pesar de su aparentemente escasa importancia política, a los procesos de golpe de estado y dictaduras militares de la década del setenta en América Latina, que en varios casos tuvieron como una de sus motivaciones frenar procesos de organización social en el campo.

9. Señalar finalmente que el desmantelamiento de los movimientos campesinos, el exilio o la supresión física de sus dirigentes, y la propia situación de rígido control político durante las dictaduras, explican por qué, cuando resurge la acción colectiva en la etapa siguiente a partir de la década del ochenta, se hará desde abajo, desde las organizaciones locales, con amplia participación de distintos actores, campesinos y campe-

sinas, jóvenes, indígenas, trabajadores rurales, agricultores familiares, etc., cada uno desde sus realidades, con nuevos dirigentes y nuevos estilos organizativos.

### TERCERA ETAPA: 1970-2000<sup>6</sup>

Hacia la década del sesenta el modelo de sustitución de importaciones ya mostraba signos de agotamiento. El proceso de industrialización se encontraba estancado, la producción agraria volcada a los mercados internos había encontrado sus límites, los procesos inflacionarios corroían los ingresos de los asalariados y con ello la base de sustentación del modelo. Hacia la década del setenta comienza un proceso de liberalización económica, apertura de fronteras, ajuste económico y desregulación estatal que modificará profundamente las economías y las sociedades de los países latinoamericanos.

Las últimas tres décadas del siglo XX fueron dominadas por un creciente proceso de globalización de la economía. El nuevo modelo de acumulación ha desarrollado las fuerzas productivas hasta un nivel desconocido anteriormente. La globalización económica se caracteriza por la creciente integración de “estructuras productivas, sistemas financieros y los mercados mundiales” a partir del fuerte desarrollo de las empresas transnacionales que son las que han liderado estos procesos (Llambí, 1994). Al decir de Ianni, la globalización genera una nueva forma de acumulación originaria: “destruye y reproduce, subordina e integra, subsumiendo formal o realmente las más diversas formas sociales y técnicas de organización del trabajo. Revoluciona relaciones de producción y modos de vida en todos los lugares, próximos y remotos” (Ianni, 1994).

En años recientes se han dado pasos definidos hacia la reorganización del comercio mundial bajo el signo de la liberalización. Esto ha ocurrido siguiendo dos tendencias que incluso pueden ser vistas como contradictorias (Krugman, 1991). Por un lado la Organización Mundial del Comercio ha avanzado en la dirección de liberalizar el comercio de manufacturas, productos agrícolas, servicios, inversiones y propiedad intelectual, entre otros. Por el otro lado, un nuevo orden mundial está emergiendo reorganizado en bloques económi-

---

<sup>6</sup> Este apartado está basado en un trabajo anterior del autor: Piñeiro, Diego E. “Desafíos e incertidumbres para la Sociología Agraria en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo”. En Diego E. Piñeiro (Comp.), *Globalización, Integración Regional y Consecuencias Sociales sobre la Agricultura*, AUGM-UNESCO, Universidad de la República, Montevideo, 1996, pp: 33-80.



cos: la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Libre Comercio de Norte América, el MERCOSUR y el bloque del yen en el sudeste asiático.

Detrás de los procesos de globalización económica se perfilan las tendencias hacia la conformación de un orden político global. Así, el papel de organismos tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, más allá de su función económica, debido a su capacidad para incidir sobre la política económica de los gobiernos a quienes presta recursos, ha tendido a modelar la política interna de las naciones. En las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales también son perceptibles cambios, principalmente luego de la caída de los países socialistas del este europeo, tendiéndose a construir mecanismos y sistemas de regulación global. Sin embargo, el carácter asimétrico de las relaciones de poder en estos organismos tiene como resultado un neto predominio de los intereses y perspectivas de las principales potencias occidentales.

En otro plano hay fuertes tendencias a la uniformización cultural a partir de los moldes de las sociedades occidentales desarrolladas, vehiculizados por la expansión de los medios masivos de comunicación y por las autopistas de la informática, capaces de transferir información instantáneamente de una a otra parte del globo. En la contracara de esta globalización cultural estallan los nacionalismos, los fundamentalismos religiosos y la defensa de las particularidades de las etnias, regiones, naciones, comarcas, que, agredidas por la uniformización, pretenden rescatar y valorizar su identidad. Globalización cultural, y rescate y afirmación de las identidades, se convierten así en los polos de la contradicción dominante.

Uno de los aspectos más relevantes de este nuevo modelo es la sobredeterminación de lo económico por sobre lo político y lo social, y fundamentalmente el sentimiento de impotencia frente a las condiciones macroeconómicas de inserción internacional, la creencia en la autonomía de la economía en relación a las políticas, la sensación de ajenidad que produce en los sujetos individuales y colectivos, y un sentimiento de incertidumbre y angustia provocado por la pérdida de referentes y horizontes de creencias más o menos previsibles. La inmediatez de los cambios y el valor de lo instantáneo, incorporado por la revolución de las comunicaciones, se suma para contribuir a este sentimiento de “enajenación de lo ajeno y expropiación de lo propio que se vive como amenaza...” (Beck, 1998: 10).

Otro de los rasgos de la globalización económica es el surgimiento de las cadenas agroalimentarias mundiales. Estas han sido impulsadas principalmente, pero no sólo, por grandes empresas transnacionales. Algunos de sus rasgos son la tendencia a la homogeneización de la producción y la integración vertical, el desarrollo y la imposición de tecnologías agrícolas uniformes mediante la producción bajo contrato, la innovación constante en las fases industriales y agroindustriales, la uniformización de las pautas de consumo, y los cambios institucionales y organizacionales.

### AJUSTE ESTRUCTURAL EN LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS

Tal vez una de las consecuencias más importantes para el análisis que se está haciendo sea el abandono de la idea-fuerza del desarrollo por la del crecimiento económico. En efecto, el desmantelamiento del modelo ISI, de las políticas regulatorias del Estado y del estado de bienestar, reemplaza la idea de la intervención estatal para guiar el desarrollo económico y social por la de que el mercado es el que guiará y estimulará el crecimiento económico. Implícita está la idea de que el mero crecimiento económico expandirá sus beneficios a los distintos sectores de la sociedad.

El fuerte endeudamiento externo de los países latinoamericanos en la década del setenta y la suba de las tasas de interés a principios de la década siguiente colocaron a estos países en una delicada situación económico-financiera. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos, influidos por las condiciones que exigen los organismos financieros como el FMI y el BM, a los que recurren para obtener los créditos que permitan superar los desequilibrios financieros, ponen en marcha medidas de estabilización y ajuste estructural.

Las consecuencias de estas políticas durante la década del ochenta serán importantes en varios aspectos. Por un lado se promocionan y aumentan las exportaciones mientras caen las importaciones; el ingreso por habitante y la inversión caen a niveles inferiores a los de la década pasada; se incrementan los fenómenos inflacionarios; aumentan el desempleo y el subempleo; se deteriora el salario real; aumentan la pobreza y la indigencia tanto a nivel urbano como rural. Se ha caracterizado a este decenio como la “década perdida” para el desarrollo.

En la década del noventa, las economías del Cono Sur se recuperan. Estimuladas por las inversiones que se realizan por la venta de

los activos del Estado, recibiendo fondos que provienen de una arriesgada política de endeudamiento externo, y controlando la inflación, dichas economías crecen a tasas sostenidas durante casi todo el período. Recién hacia el final del mismo los servicios de la deuda y el desbalance en los ingresos y los gastos del sector público disminuirán el ritmo del crecimiento. Argentina se precipita hacia una profunda crisis económica y financiera que arrastra luego a Uruguay y deja a Paraguay al borde el abismo. Brasil devalúa su moneda, quebrando el Plan Real a principios de 1999, y de esa manera logra sortear la crisis financiera. Argentina primero y luego Uruguay deben devaluar sus monedas en el año 2002, alterando los equilibrios macroeconómicos.

Desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos, sin embargo, es de destacar que la agricultura latinoamericana creció durante las décadas del ochenta y del noventa a una tasa mayor que la del PIB del conjunto de la economía. Dicho crecimiento se explica por el incremento sostenido de la superficie agrícola, un incremento de los rendimientos físicos y un crecimiento substancial de las exportaciones tanto en volumen físico como en el valor exportado (a pesar de los precios generalmente decrecientes de las materias primas). Estos aumentos de la productividad han sido posibles por la incorporación de las tecnologías de la revolución verde basadas en la mecanización creciente de las labores agrícolas, el uso extendido de agroquímicos, la incorporación de nuevos cultivos y de nuevas variedades para los cultivos tradicionales.

Por otro lado, la creciente urbanización de la población, iniciada ya en la década del setenta, se aceleró en la década siguiente. Si bien la población total rural no disminuyó en términos absolutos, sí lo hizo en términos relativos, pasando de ser un 50% en la década del sesenta a sólo un 30% en la década del ochenta y un 28% en la década del noventa. La urbanización provocó la expansión del mercado interno y el aumento de la demanda de alimentos, incentivó la producción agrícola, produjo una urbanización creciente de hábitos y costumbres en el medio rural debido a la densificación de una trama relacional entre los migrantes urbanos y su retaguardia rural.

## EL PREDOMINIO DE LOS COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES

En las últimas décadas del siglo XX el capitalismo ha terminado de instalarse firmemente en el agro latinoamericano. Pero como todo proceso contradictorio, lo ha hecho bajo diversas formas. La forma

hegemónica de dicho capitalismo ha sido el desarrollo de las cadenas y complejos agroindustriales. Con ello se está queriendo indicar que son los sistemas de producción más dinámicos, donde hay mayor inversión, a quienes el Estado dirige su apoyo, donde el capital se reproduce en forma ampliada, donde se produce para los mercados internos o externos de mayor dinamismo, vinculándose con los sistemas agroalimentarios mundiales. Los complejos agroindustriales integran generalmente las etapas de producción agrícola, producción y aprovisionamiento de insumos para la agricultura, procesamiento, almacenamiento y distribución. El concepto de complejo agroindustrial incluye el de núcleo del complejo, siendo definido como la etapa en la cual se concentra la capacidad de determinación sobre las demás etapas del mismo (Vigorito, 1977).

El Estado ha jugado un papel central en la formación de este nuevo patrón agrario a través de medidas específicas y el manejo de instrumentos. El apoyo crediticio abundante y a tasas de interés favorables; el manejo de la tasa de cambio para favorecer tasas de cambio reales que permitan exportar en mejores condiciones de competitividad; las exenciones tributarias, disminuyendo los impuestos al agro, los aranceles de importación de insumos agrícolas y las retenciones a las exportaciones agrícolas (instrumentos de trasiego al sector industrial); la protección inicial del mercado interno para que las incipientes agroindustrias acumulen; los subsidios a las exportaciones; la caída del salario real de los trabajadores agrícolas, el control de la fuerza de trabajo y el desestímulo a la organización sindical; el apoyo a la investigación y transferencia tecnológica; la creación de un mercado de tierras o su expansión a través del estímulo a la colonización; la creación de la infraestructura de servicios necesaria (camino, energía eléctrica, o la construcción de grandes obras de riego). Estas características han hecho decir a Martine que “la tan publicitada modernización agrícola cuya base es la “caificación” infelizmente, se presenta como una transformación parcial, desigual, fuertemente sustentada por recursos públicos, inherentemente limitada y con más rasgos de un capitalismo prebendario que de un capitalismo moderno” (Martine, 1991: 35).

Sin embargo es conveniente hacer notar la diversidad de situaciones agrarias en América Latina. Mientras en algunos países el desarrollo de los complejos agroindustriales está más avanzado, en otros puede no estarlo tanto. Pero aún dentro de cada país la extensión de la “caificación” puede ser variable por rubro de producción: mientras

algunas cadenas están muy integradas, otras lo están en muy bajo grado. En fin, rubros de producción que se encuentran fuertemente integrados en un país pueden estar muy poco integrados en otro.

Los principales actores de esta época son los empresarios vinculados a los complejos agroindustriales. El núcleo de los complejos generalmente está ocupado por empresas trasnacionales o nacionales, cuyos capitales no son de origen agrario, si bien hay casos en los cuales es el capital de origen agrario (privado o cooperativo) que se posee del núcleo de un complejo. Por lo tanto, es preciso resaltar que al predominar los complejos agroindustriales, los actores principales del agro pueden ser de origen agrario o extra-agrario. La experiencia muestra que, además, muy raramente son rurales.

Pero también hay empresarios en la etapa agraria del complejo. Estos pueden desempeñar un papel determinante en la política del complejo (si además controlan total o parcialmente su núcleo) o pueden jugar un papel subordinado a las empresas no agrarias que controlan el mismo. Simétricamente se vinculan al complejo los asalariados, tanto agrarios como industriales, rurales como no rurales. Los complejos también articulan, aunque en forma subordinada, a productores agrarios con formas no capitalistas de producción: campesinos, “farmers” y pequeños productores.

Como se ha expresado más arriba, el hecho de que la forma de producción predominante sean los complejos agroindustriales no excluye la existencia de situaciones en las que estos no están presentes. Hay vastas regiones de América Latina, incluso países, rubros de producción, grupos sociales, etnias indígenas, etc., que aún no han sido tocados por el desarrollo de los complejos agroindustriales. Así, un análisis realista del agro en nuestro continente debe reconocer la existencia de un importante sector de empresas que si bien no están insertas en dichos complejos no por ello dejan de ser capitalistas: las viejas haciendas, las estancias, en general empresas extensivas en que aún el capital fundiario juega un papel importante en la forma en que se apropian del excedente económico, pero haciendo pleno empleo de relaciones capitalistas de producción.

También es preciso reconocer la existencia de un vasto sector del campesinado y de pequeños productores que no se han integrado a los complejos agroindustriales. La mayoría de ellos son productores de alimentos para sus propias familias y para la venta en los mercados de pueblos y ciudades. Son principalmente, entonces, productores de bienes-salario para los sectores populares urbanos.

Finalmente hay un sector de campesinos pobres con escasos recursos naturales o sin tierra que no tienen un papel definido a jugar en la modalidad de desarrollo capitalista agrario que ha adoptado el agro latinoamericano. Son los migrantes rurales, los trabajadores temporales, los desocupados, los desalojados de las grandes obras y represas, los que viven en las orillas de las ciudades o en los intersticios de las propiedades rurales, que están por debajo de la línea de pobreza y aún por debajo de la línea de indigencia: son los excluidos del campo.